

## Opinión

## DIARIO DE NAVARRA

Fundado en 1903

EDITA: Diario de Navarra, S.A.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Virgilio Sagúes Arraiza

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda



DEPÓSITO LEGAL:  
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301.  
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263.  
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255

DIFUSIÓN CONTROLADA POR OJD.  
Promedio último control: 60.032 ejemplares.

DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN  
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001

REDACCIÓN  
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191  
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa

SUBDIRECTORES  
Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj

REDACTORES JEFES

José Miguel Iriberrí (Nacional/Internacional), José J. Murugarren (Navarra), José María Esparza (Deportes), Fernando Pérez Ollo (Opinión) y Fernando Hernández (Diario 2).

JEFES DE SECCIÓN

Luis M. Sanz y Nacho Calvo (Navarra), Gabriel Imbuluzqueta (Cierre), Germán Larrañaga (Diseño), Jorge Nagore (Fotografía), Germán Ulzurrun (Mesa de Redacción) y Francisco J. Zudaire (Opinión).

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7

Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7  
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS

Centralita	948 236050
Redacción	948 236050
Fax Redacción	948 150484
Publicidad	948 221355
Fax Publicidad	948 206048
Distribución	948 236000
Suscripciones	948 076068

Prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1. párrafo segundo de la Ley de Propiedad Intelectual, conforme a la redacción dada por la Ley 23/2006, de 7 de julio.

## EDITORIAL

## La memoria fiscal y el rostro de la Justicia

Los homicidios cometidos en 2008 multiplicaron casi por cinco los de 2007 y los registrados contra el patrimonio aumentaron el 6,6%. Son datos dados a conocer en la apertura del año judicial.

La Memoria de la Fiscalía General del Estado muestra cada año la *temperatura* del delito que, invariable y desgraciadamente, sube en cantidad y calidad. Lo mismo da mencionar el incremento de homicidios que el aumento de bandas organizadas y, por supuesto, siempre hay alguna novedad que llama la atención: este año, el mayor número de adolescentes que pegan a sus padres. Otra constante del informe es el retraso acumulado entre la comisión del delito y la resolución judicial del mismo, pero ésa es una batalla -la de la Justicia- que requiere una atención especial por su carencia hartamente denunciada de medios materiales y humanos. Es decir, el informe de la fiscalía presenta una situación que cada año va a peor, tanto en cuanto al número de delitos como en lo que se refiere a la presteza en juzgarlos. Esa exposición de la fiscalía, que sirve para abrir oficialmente el año judicial, no aporta nada más allá de ofrecer un retrato de lo sucedido, cuando sería una oportunidad para reflexionar en voz alta sobre la tarea exigible en aras a un mejor funcionamiento de la Justicia y en pedir a los poderes públicos el compromiso de rebajar -para el año que viene- el contenido delictivo de esa memoria. Naturalmente, tendría que ser el Gobierno el primero en reconocer que la inseguridad ciudadana aumenta y tendría que comprometerse a tomar medidas resolutivas. Al fin y al cabo, al Ejecutivo le atañe la administración del país. Poco se gana con los mensajes edulcorados y la prepotencia de creerse siempre en posesión de la verdad. No se puede cerrar los ojos ante realidades que, por otra parte, se ofrecen a la vista de todos. Hay asuntos que merecen una prioridad absoluta, y eso ocurre ahora mismo con materias fundamentales como la Economía, la Justicia y la Educación, entre otros, cuyas carencias y fallos repercuten gravemente en el día a día y en absoluto auguran la llegada de tiempos mejores.

La Memoria de la Fiscalía General se presta a muchas y variadas observaciones. Por encima de todas, una: un crecimiento del deterioro social que no satisface a nadie y cuyo cambio de tendencia no se producirá con esperar a la próxima memoria.

**No sirve de nada limitarse a restregar a la opinión pública el aumento de delitos**

## APUNTES

## Mensajes contrapuestos

El presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra, José Manuel Ayesa, es partidario de aumentar el límite de gasto propuesto por el Gobierno foral para los Presupuestos de Navarra de 2010. La condición es que el incremento se destine "fundamentalmente a la economía productiva". Al mismo tiempo, Gerardo Díaz Ferrán, presidente de CEOE, organización a la que pertenece la CEN, abogaba por una mayor austeridad en el gasto del Estado. Ambos mensajes pueden resultar contradictorios y confunden al ciudadano.

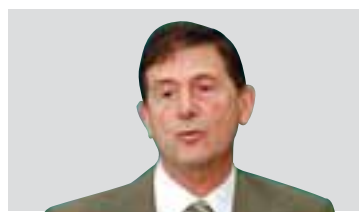
## Argucias anunciadas

En el acto político celebrado por EA en Pamplona, su máximo dirigente en Navarra, Maiorga Ramírez, se comprometió a utilizar todas las argucias posibles para que la ikurriña ondee en los ayuntamientos navarros. Se trata de imponer argumentos falsos (RAE) para salirse con la suya e incumplir la ley. Escasa sorpresa, porque en el uso de los sofismas hace ya tiempo que llueve sobre mojado, y no sólo en los ayuntamientos: los nacionalistas supieron esconder muy oportunamente la ikurriña en campaña electoral. Ésa sería una argucia 'por defecto'.

## Figuieruelas: el poder de la política

España, recuerda el autor, después del desafortunado desplante que el gobierno hizo a Alemania en el caso de EON, ha sido un invitado de piedra a la hora de defender la planta de Figueruelas

Luis Sarriés Sanz



MIENTRAS en Navarra nos felicitamos por el creciente incremento de producción de VW con un fuerte impacto en el empleo y en las arcas de la comunidad, en la Ford de Valencia los trabajadores protestan estos mismos días por el ERE de 600 empleados, en Valladolid los trabajadores de la Renault hacen importantes concesiones en la negociación del nuevo convenio colectivo para conseguir nuevos modelos que garanticen la continuidad de las plantas (Valladolid y Cuenca), en Barcelona la Nissan sigue asfixiada por la incertidumbre y en Zaragoza 40.000 aragoneses, encabezados por políticos, sindicalistas y otras fuerzas sociales y económicas salen a la calle para que no se an despedidos 1.700 trabajadores de la planta de Opel en Figueruelas. Opel cuenta con 7.500 trabajadores. El sector de automoción aragonés da 20.000 puestos de trabajo. Parece lógico que salgan a la calle.

Hace meses que Opel España de Figueruelas está soportando constantes incertidumbres. GM, accionista mayoritario de Opel en Europa, se declaró en diciembre del año pasado en bancarrota. Opel se salvó, en aquel momento, gracias a un crédito puente del gobierno alemán de 1.500 millones de euros. Como consecuencia de esta situación había comenzado una agotadora negociación para vender todas las plantas de Opel en Inglaterra, Bélgica, Suecia, Alemania, Polonia, España y Rusia. En mayo de este año, Frank Stronach, fundador del consorcio austrocanadiense Magna, segundo proveedor de componentes de automoción, después de Bosch, anunció que tenía interés en salvar a Opel. Más tarde, se asociaría con el banco ruso Sberbank. Entre las dos firmas deberían aportar cinco mil millones. Apareció más tarde, con una oferta más atracti-

va para GM, la empresa belga RHJ International.

En agosto, GM comienza a recuperarse en América y Asia. Había producido efecto el nuevo liderazgo del viejo Lutz, jefe de Marketing y Diseño, con su eslogan: "Move fast, plan well, don't it safe". Después de importantes vacilaciones sobre la conveniencia o no de desprenderse de Opel, parece que GM ha optado por la venta de Opel a Magna, con el apoyo del banco ruso Sberbank. Una operación por la que ha apostado fuertemente la canciller alemana Angela Merkel y su ministro de economía Karl-Theodor zu Guttenberg.

La operación ha despertado serias reticencias tanto entre algunos fabricantes como en los gobiernos más afectados. VW y BMW no quieren que su proveedor Magna sea al mismo tiempo fabricante por los peligros que implica que un proveedor se convierta en fabricante competidor. Los gobiernos de Londres, Bélgica y España no se sienten suficientemente tenidos en cuenta en la negociación dirigida por Alemania. Incluso la Comisión Europea había manifestado que vigilaría para que la operación fuera transparente. Pero ya sabemos el peso final que tiene la Comisión Europea en ciertas decisiones de los países miembros. El resultado ha sido que Alemania ha conseguido sus objetivos. Es evidente que GM tiene un exceso de capacidad productiva y que necesita serios ajustes. La propuesta final de Magna es suprimir 10.560 puestos de trabajo en Europa (inicialmente se había hablado de 20.000), de los cuales 4.500 en Alemania, donde la planta más desfavorecida sería la de Bochum que perdería 2.045 empleos. A Figueruelas le corresponderían 1.700 despedidos.

Lo más llamativo en el caso de Fi-

gueruelas no es que el reajuste se deba a exceso de personal, sino a que se llevan producción de esta planta a Eisenach (Alemania). Es decir, los 1.700 trabajadores sólo sobran porque les quitan trabajo. España, después del desafortunado desplante que el gobierno hizo a Alemania en el caso de EON, ha sido un invitado de piedra a la hora de defender la planta de Figueruelas. Y todo, a pesar de que la planta de Figueruelas es una de las más competitivas por su innovación en la producción, en la organización y en la calidad del producto, como se pudo comprobar hace apenas tres años cuando consiguió captar la fabricación del modelo Meriva, frente a su competidora polaca, la planta de Gliwice. De hecho, en junio de este año, un representante de Magna había anunciado que Figueruelas tendría que soportar una reducción de plantilla, pese "al valor de la misma, que radica en los trabajadores que, con su esfuerzo, han conseguido cumplir siempre plazos y objetivos".

El caso de Figueruelas es una advertencia de lo que puede suceder en el sector de automoción. Europa no es capaz de poner orden en un sector donde se juegan importantes intereses nacionales y donde gobiernos y sindicatos intentan captar producción, aunque sea en detrimento de otros países. Desde numerosos ámbitos internacionales se pide control sobre los sistemas financieros, causantes de la crisis mundial en la que vivimos en vueltas. Pero también debería haberlos en el ámbito de la economía real y de las empresas a fin de evitar los nacionalismos que siempre favorecen a los países más fuertes.

Luis Sarriés Sanz es catedrático de Sociología Industrial de la UPNA

